



**Ciudad de México; veinte de octubre de dos mil
séis.**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

[illegible]

RESULTANDO:

PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil veintiséis, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y turnado ese mismo día a este juzgado; *****

***** demandó en la vía oral mercantil de *****

***** ***** ***** ** ***** ***** , *****

** ***** ***** ***** ***** ** *****

***** ***** ***** ***** , las siguientes prestaciones:

“A) La declaración judicial de **NULIDAD ABSOLUTA, POR AUSENCIA DE CONSENTIMIENTO**, de las ***** disposiciones ejecutadas el * * * * * con cargo a la cuenta de depósito número ***** (CLABE *****) del suscrito -contratada con la demandada bajo su anterior denominación-: ***** cargos por operaciones de comercio por ***** , ***** transferencias electrónicas interbancarias (SPEI) a una cuenta de tercero en la institución ***** por ***** ; y ***** pagos aplicados sin consentimiento del suscrito a la tarjeta de crédito a que se refiere la prestación C), por ***** ; operaciones identificadas una a una en la **RELACIÓN ÚNICA** integrante de esta demanda.

B) Como consecuencia de la prestación anterior, la **RESTITUCIÓN ÍNTEGRA** de la cantidad de ***** ***** ***** * ***** ***

***** -importe neto de las disposiciones
impugnadas, descontados los abonos de
provenientes de las disposiciones del saldo de la
tarjeta a que se refiere la prestación C), conforme a la
RELACIÓN ÚNICA-, mediante abono a la propia
cuenta de depósito del suscrito.

***** * **** ***** ***** ***** : consumos
contratados a meses por ***** y disposiciones
de saldo por ***** que con sus comisiones
importan *****; así como la cancelación de
todos los intereses, comisiones, impuestos y
accesorios, de las parcialidades pendientes de aplicar
en cortes subsecuentes por ***** , la
abstención de cobro de cualquier saldo derivado de
dicho plástico y la restitución de los pagos que le
fueron aplicados con recursos del suscrito.

D) El pago de INTERESES MORATORIOS a razón del seis por ciento (6%) anual, en términos del artículo 362 del Código de Comercio, sobre las cantidades indebidamente dispuestas de la cuenta de depósito del suscrito, computados desde el 1 de agosto de 2026 y hasta su restitución íntegra y efectiva.

E) La condena a la demandada a abstenerse de reportar y, en su caso, a gestionar la eliminación de los registros o claves de prevención negativos ante las sociedades de información crediticia que deriven de los productos y cargos impugnados, como consecuencia natural de la nulidad que se declare.

F) El pago de los gastos y costas que origine la tramitación del presente juicio, en términos del artículo 1084 del Código de Comercio.”

[illegible]



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

TERCERO. Desahogo y Admisión. A través del proveído de veintisiete de agosto de dos mil veintiséis, se tuvo por desahogado el requerimiento previamente formulado, se **admitió** la demanda en la vía oral mercantil y se ordenó emplazar a la demandada para que en el plazo de nueve días la contestara por escrito e hiciera valer las excepciones y defensas que a su interés convinieran, además se tuvieron por anunciadas las pruebas que la actora señaló en su demanda inicial, con fundamento en el artículo 1390 Bis 13 del Código de Comercio.

CUARTO. Diligencia de emplazamiento. Mediante diligencia de veintiocho de agosto de dos mil veintiséis, se emplazó a juicio a la demandada, por conducto de quien dijo ser su empleada, para lo cual el actuario judicial de la adscripción, le corrió el traslado de ley; e hizo de su conocimiento que contaban con un plazo de nueve días para que ocurrieran a contestar la demanda promovida en su contra, así como para que opusieran las excepciones y defensas que tuvieran para ello.

QUINTO. Declaratoria de rebeldía. Por acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veintiséis, previo el examen del emplazamiento, se tuvo por precluido el derecho de la demandada para formular su contestación, en consecuencia, se declaró la rebeldía en que incurrió al no haber dado contestación a la demanda.

Se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia preliminar.

SEXTO. Audiencia preliminar. El dos de octubre de dos mil veintiséis, tuvo verificativo la audiencia preliminar, en la que, entre otras cuestiones, se procedió a la calificación de las pruebas ofrecida por la parte actora; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de juicio.

Acto seguido, se escucharon los alegatos que al efecto formuló la parte actora y tuvo por precluido el derecho de la demandada; se declaró visto el asunto y; finalmente, se decretó un receso para el dictado de la sentencia correspondiente:

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1339 y 1390 Bis del Código de Comercio; así como en los Acuerdos Generales **03/2013** y **28/2020**, el primero de ellos relativo a la determinación y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito; y el segundo, relativo al inicio de funciones de este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de

[illegible]

Además, se toma en cuenta que por disposición de los



artículos 1055 y 1390 Bis del Código de Comercio, vigente al momento de presentación de la demanda, en relación con el **transitorio cuarto** del decreto publicado en el Diario Oficial de la federación, el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, reformado mediante diverso decreto difundido el **veintiocho de marzo de dos mil dieciocho**, estableciendo que a partir del veintiséis de enero de dos mil veinte, en los juicios orales mercantiles se tramitarán todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía; siendo que el caso a estudio es de cuantía determinada, previsto en el precepto legal citado en último término, y no existe una vía especial para este tipo de juicios.

TERCERO. Legitimación. Por ser la legitimación en la causa un aspecto que atañe al fondo de la cuestión litigiosa sólo puede analizarse en el momento en que se pronuncie la sentencia definitiva, ha lugar a analizar la misma.

Lo anterior encuentra apoyo en la tesis jurisprudencial J/67, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, Julio de 2008, página 1600, registro 169271, que dice:

“LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. SÓLO PUEDE ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA Debe distinguirse la legitimación en el proceso, de la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere o a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro. En este sentido, siendo la legitimación ad procesum un presupuesto procesal, puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el actor carece de capacidad para comparecer a él o no justifica ser el representante legal del demandante, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en el mismo. En cambio, la legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable. En efecto, ésta consiste

100 **Journal of Management**

019949,

la titula

Frequency	Percentage
Never	1%
Once a week	1%
Several times a week	1%
Several times a day	97%

Age Group	Number of People
10-19	100
20-29	80
30-39	60
40-49	40
50-59	20
60-69	10
70-79	5
80-89	2
90-99	1

Age Group	Number of People
10-19	100
20-29	80
30-39	60
40-49	40
50-59	20
60-69	10
70-79	5
80-89	2
90-99	1



cuyo nombre se emitió la tarjeta de crédito cuya contratación desconoce.

La persona moral demandada *****

***** , del mismo modo se

encuentra legitimada en términos del citado precepto, pues es a quien se atribuye la obligación de conservar y restituir los recursos depositados, así como la emisión de la tarjeta controvertida, y a quien en esta vía se le exige el cumplimiento.

- El actor precisó al desahogar la prevención que demanda a una sola persona moral, por transformación.
- Los estados de cuenta históricos de la cuenta de depósito se emitieron bajo la denominación anterior, y el estado de cuenta de la tarjeta, del uno al ocho de agosto de dos mil veintiséis, se emitió ya como *****
***** , con el mismo domicilio.

- La demandada fue omisa en exhibir las constancias de autorización y de transformación que le fueron

curso, y además de previo y especial pronunciamiento, puede resolverse en cualquier momento, sea durante el procedimiento o en la sentencia; en cambio, la legitimación activa en la causa es un elemento esencial de la acción que presupone o implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad del derecho que se cuestiona, esto es, que la acción sea entablada por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular en el caso concreto la función jurisdiccional; por tanto, tal cuestión no puede resolverse en el procedimiento sino únicamente en la sentencia, por tratarse de una cuestión de fondo, perentoria; así, estima este Tribunal Colegiado que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación alude a que la legitimación puede estudiarse de oficio en cualquier fase del juicio, se refiere a la legitimación "ad procesum", no a la legitimación ad causam. En consecuencia, si la parte demandada niega el derecho que hace valer la parte actora, por considerar aquella que ésta no es la titular del derecho litigioso, resulta inconcusos que se trata de una excepción perentoria y no dilatoria que tiende a excluir la acción deducida en el juicio, por lo que tal cuestión debe examinarse en la sentencia que se llegue a pronunciar en el juicio."

En la inteligencia que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1,390 Bis 34 del Código de Comercio, las cuestiones relativas a la legitimación procesal de las partes, fueron examinadas en la audiencia preliminar celebrada dentro del presente juicio, a lo que se hace remisión en obvio de repeticiones.

CUARTO. Litis. La materia de la *litis* en el presente asunto se constriñe en determinar si resulta procedente declarar judicialmente la nulidad absoluta de las siguientes operaciones:

a) Las treinta disposiciones realizadas el uno de agosto de dos mil veintiséis con cargo a la cuenta de depósito

b) La contratación y activación de la tarjeta de crédito “* **” terminación **** y de los cargos efectuados con ella.**

Como consecuencia, se determinará si procede la
restitución de ***** ***** ***** *

***** a la cuenta del actor; la cancelación de los cargos
***** *
realizados a la tarjeta de crédito por el monto de *****

```
*****  
*****
```

***** de sus accesorios y de las
parcialidades pendientes por la cantidad *****



***** * *****

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

moratorios, las medidas relativas a la información crediticia y el pago de los gastos y costas.

O si en su defecto, si en la especie lo que procede es absolver a la enjuiciada de cumplir con las referidas prestaciones por no encontrarse acreditados los elementos constitutivos de la acción.

Para ello, debe tomarse en consideración lo dispuesto por los artículos 1194 y 1196, en relación con el diverso 1390 Bis 8, todos del Código de Comercio, que establece: “***El que afirma está obligado a probar...***”, por lo que, de conformidad con dichas disposiciones, la parte actora debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandada los de sus excepciones.

Preceptos los primeros que disponen:

“Artículo 1194. El que afirma está obligado a probar. En consecuencia, el actor debe probar su acción, y el reo sus excepciones.

Artículo 1196. También está obligado a probar el que niega, cuando al hacerlo desconoce la presunción legal que tiene a su favor el colitigante.”

Apoya esa consideración la tesis aislada (sin número) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Septiembre de 1993, página 291 y registro 215626, que dice:

“PRUEBA CARGA DE LA. La carga de la prueba incumbe a quien de una afirmación pretende hacer derivar consecuencias para él favorables, ya que justo es que quien quiere obtener una ventaja, soporte la carga probatoria. En consecuencia, el actor debe justificar el hecho jurídico del que deriva su derecho. Así, la actora debe acreditar la existencia de una relación obligatoria. En el supuesto de que se justifiquen los hechos generadores del derecho que se pretende, la demandada tiene la carga de la prueba de las circunstancias que han impedido el

QUINTO. Rebeldía de la parte demandada. La demandada no dio contestación a la demanda, por lo que en el dieciocho de septiembre de dos mil veintiséis se tuvo perdido su derecho para hacerlo. Por ello, no existen excepciones o defensas que deban ser analizadas.

En ese contexto, a fin de estar en posibilidad de entrar al estudio de la nulidad planteada, es necesario analizar lo previsto en el Código Civil Federal; lo anterior, ya que se advierte que ni la legislación mercantil en general ni alguna otra norma específica para estos casos regula expresamente la acción de nulidad.

Por ello, debe estar a lo dispuesto por el ordenamiento civil referido, que regula los efectos y las consecuencias de los actos existentes pero viciados, como en la hipótesis referida

Apoya a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 11/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, abril de 2007, página 143, registro 172731, cuyo contenido es el siguiente:

“NULIDAD ABSOLUTA. PROCEDE CUANDO SE ALEGA LA FALSEDAD DE LA FIRMA IMPRESA EN UN PAGARÉ (VOUCHER) SUSCRITO EN VIRTUD DE UNA COMPRA REALIZADA A TRAVÉS DE UNA TARJETA DE CRÉDITO. Cuando se reclama a las instituciones de crédito la

De una interpretación sistemática de los citados preceptos legales se advierte que para la existencia del acto jurídico se requiere, entre otros requisitos, el **consentimiento**. La falta de ello o de objeto que pueda ser materia de él, **provoca que el acto jurídico sea nulo de pleno derecho, ya que aun cuando exista en el mundo fáctico no puede producir efecto legal alguno; lo cual no es susceptible de valer por confirmación ni por prescripción, dado que su inexistencia puede invocarse por todo interesado.**

De igual forma, se evidencia que, por regla general, la nulidad absoluta no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juzgador la nulidad, de la que puede prevalecer todo interesado y no desaparece por confirmación o prescripción.

1. La existencia del vínculo jurídico entre las partes;

2. La existencia de las operaciones bancarias controvertidas;

3. La falta de consentimiento respecto de las operaciones controvertidas.

PRIMERO ELEMENTO.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

A. Respecto a la cuenta de depósito bancario

número *****. Por cuanto hace a la relación contractual derivada de la cuenta de depósito, se encuentra plenamente acreditada, principalmente con las manifestaciones vertidas por la parte actora en el hecho 1 del escrito inicial de demanda, en donde manifestó ser titular de la cuenta de depósito número ***** (CLABE interbancaria *****), contratada con la demandada bajo

su anterior denominación social, ** *****

Robustece lo anterior, las documentales privadas consistentes en los trece estados de cuenta de la referida cuenta, correspondientes a los periodos de junio de dos mil veinticinco a junio de dos mil veintiséis, de los que se advierte de manera uniforme el nombre del actor como cliente y el número de cuenta de donde derivan los cargos materia de la litis.

Cuenta Nu: *****
RFC: *****
Periodo: *** ** * ** *

B. Respecto a la tarifa ¡Hola, Honorio!

terminación ****. Por lo que **de Junio**

****, terminación ****, la existencia del vínculo formal a nombre del accionante se desprende de la documental privada aportada por la parte actora consistente en el estado de cuenta correspondiente al periodo del uno al ocho de agosto de dos mil veintiséis, emitido por *****

***** del que se
advierte el nombre del actor como cliente.



En consecuencia, queda plenamente acreditado que la parte actora y la demandada, tienen una relación contractual, derivada de la celebración del contrato respecto a la cuenta bancaria en la que se realizaron las operaciones materia litis.

SEGUNDO ELEMENTO.

A. Respecto a las operaciones ejecutadas con cargo a la cuenta de depósito bancario número

*****. En el hecho 5 del escrito inicial, *****
***** manifestó que el uno de agosto de dos mil veintiséis, entre las tres horas con cuarenta y un minutos y treinta y cuatro segundos y las quince horas con cincuenta minutos, se ejecutaron treinta disposiciones con cargo a su cuenta de depósito número ***** , con CLABE ***** , por un importe bruto de *****

***** , integradas de la siguiente manera:

1. Cinco transferencias electrónicas interbancarias (SPEI): señaló que se realizaron hacia una misma cuenta de tercero abierta en **** , por los siguientes importes:

*****; y
***** , que conjuntamente ascienden a *****

*

FECHA	DEL 01 AL 31 AGO 2026 (31 DÍAS)	MONTO EN
		PESOS
		MEXICANOS

UZIEL MONTER GUEVARA
7066620636a66330000000000000000017b2b
12/05/29 15:40:09



```

***** ** ***** ** ***** *****
*** ***** ***** * ** *****
***** ***** ***** **
*****
*****
*****
***** ** ***** **

```

2. Cinco pagos aplicados a la tarjeta de crédito “*”, terminación ***; el accionante los identificó por los importes de ***** ***** ***** *******

***** * ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

***** : v *****

*** ***, cuya suma es de

Estos movimientos encuentran respaldo en el estado de cuenta de la referida tarjeta, correspondiente al periodo del uno al ocho de agosto de dos mil veintiséis, su alcance consiste en demostrar la recepción y aplicación de los pagos al producto de crédito; su vinculación con las disposiciones de la cuenta de depósito número ***** se examina conjuntamente con la identificación efectuada en la demanda y con los registros de esa cuenta que fueron requeridos a la institución financiera.

Asimismo, en el estado de cuenta de la cuenta de depósito, con fecha uno de agosto de dos mil veintiséis, se asientan los siguientes pagos:

FECHA	DEL 01 AL 31 AGO 2026 (31 DÍAS)	MONTO EN PESOS MEXICANOS
★ ★ ★ ★ ★	★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ ★	★★★★★★★★★
★ ★ ★ ★ ★	★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ ★	★★★★★★★★★
★ ★ ★ ★ ★	★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ ★	★★★★★★★★★
★ ★ ★ ★ ★	★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ ★	★★★★★★★★★

***** *

Por su parte, en el estado de cuenta de la tarjeta de crédito con fecha de corte ocho de septiembre de dos mil veintiséis, en el apartado “*Distribución de tu último pago*”, se consigna que los pagos y abonos recibidos por *****

***** ***** *

* ***** fueron aplicados por la institución demandada de la siguiente manera:

DISTRIBUCIÓN DE TU ÚLTIMO PAGO						
Pagos y abonos	Compras y cargos regulares	Compras y cargos diferidos a meses sin intereses	Compras y cargos diferidos a meses con intereses	Intereses y Comisiones	IVA de intereses y comisiones	Saldo a favor
*****	***	*****	****			

3. Veinte cargos, el actor los individualizó en el hecho 5 y en la Relación Única por un importe total de *****

***** ***** * **** * ** *****

***** *
***** ***** ***** ***** conforme a la siguiente relación:

1302531 12:4030
UNET MOBILE CUEAVER

Orden	Hora	Concepto señalado en la Relación Única	Tarjeta indicada	Importe
1.	*****	***** ***** * ***** ***** ** *****	** *****	*****
2.	*****	*****	*****	*****



Juicio Oral Mercantil 751/2026-I

- 21 -

6.	*****	***** *****	***** ***** *****	*****
7.	*****	**** *	***** ***** ****	*****
8.	*****	**** *	***** ***** ****	*****
9.	*****	***** *****	***** ***** ****	*****
10.	*****	***** *****	***** ***** ****	*****
11.	*****	***** *****	***** ***** ****	*****
12.	*****	***** *****	***** ***** ****	*****
13.	*****	***** *****	***** ***** ****	*****
14.	*****	***** *****	***** ***** ****	*****
15.	*****	***** *****	***** ***** ****	*****
16.	*****	*****	***** ***** ****	*****
17.	*****	***** *****	** *** ****	*****
18.	*****	***** *****	** **** ****	*****
19.	*****	***** **** *	** *** ****	*****

20.	*****	***** *****	** *** *** *	*****
TOTAL				*****

Lo anterior, se corrobora con el estado de cuenta bancario allegado por la parte actora como prueba superveniente, emitido respecto a la cuenta *****, de la cual se aprecian las operaciones controvertidas.

Para mayor claridad, a continuación, se transcriben los asientos de dicho estado de cuenta que comprende el periodo del uno al treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis, sección “*Detalle de movimientos en tu cuenta*”, con indicación de la numeración que a cada uno corresponde en la Relación Única de la demanda:

[illegible]



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

```
*****
** ** **
***** ** **
*****
*****
** ** **
*****
*****
** ** **
*****
*****
** ** ** *****
*****
*****
*****
*****
*****
```

La referida **documental privada** por su idoneidad y eficacia, tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 1,238, 1,241 y 1,296, todos del Código de Comercio en vigor, es decir, surten sus efectos como si hubieren sido reconocidas expresamente, al haber sido presentadas en el juicio por vía de prueba y no haber sido objetada por la parte contraria.

Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica la jurisprudencia XX. J/26, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo IV, Julio de 1996, página 304, registro 201841, de rubro y texto:

“DOCUMENTAL PRIVADA, LA FALTA DE OBJECCIÓN HACE INNECESARIO PERFECCIONARLA. Si el documento privado exhibido en juicio no es objetado por la contraria en cuanto a su contenido o firma, ninguna obligación legal tiene el oferente en perfeccionarlo.”

En ese orden de ideas, tomando en consideración la naturaleza de los hechos, las pruebas documentales exhibidas por la accionante, y en el enlace natural necesario que existe entre la verdad conocida y la que se busca, conforme a la aplicación de los principios consignados en los artículos 1,283 a 1,286 del Código de Comercio **aportan elementos probatorios suficientes para demostrar la existencia de las operaciones controvertidas.**

B. Respecto a las operaciones registradas en la

tarjeta de crédito “*** **”, terminación ***.

La existencia de los consumos y disposiciones encuentra respaldo en el estado de cuenta de la referida tarjeta correspondiente al periodo del uno al ocho de agosto de dos mil veintiséis, exhibido como anexo 3 del escrito inicial.

Respecto de las compras a meses sin intereses, se identifican las operaciones denominadas *****

*****, por ***** **** *****

*****, y ***** por \$*****

***** * *****

***** * *****
***** *****; por su parte, las tres disposiciones

de saldo corresponden a los importes de *****

***** *****

***** ***** y *****

***** *****

130259 12:4030
UNNET MOBILE CUEA V67

Los consumos diferidos a meses sin intereses constan en los estados de cuenta de la tarjeta, en el apartado “Compras y cargos diferidos a meses sin intereses”, como operaciones de fecha uno de agosto de dos mil veintiséis realizadas con la “Tarjeta virtual *** **”, en los siguientes términos:

Estado de cuenta con fecha de corte al **ocho de agosto de dos mil veintiséis:**

DESGLOSE DE MOVIMIENTOS
COMPRAS Y CARGOS DIFERIDOS A MESES SIN INTERESES
Tarjeta titular: Honorio Sánchez Garaña



Por su parte, las tres disposiciones de saldo constan en el estado de cuenta de la cuenta de depósito, en los siguientes términos:

FECHA	DEL 01 AL 31 AGO 2026 (31 DÍAS)	MONTO EN PESOS MEXICANOS
*** **	*****	*****

	***** **	
	***** **	
*** **	*****	*****

	***** **	
	***** **	
*** **	*****	*****

	***** **	
	***** **	

En relación con los consumos a meses sin intereses, el documento refleja parcialidades aplicadas al corte por

***** que compone de la suma de los montos
de *****
***** y *****

***** , además de las parcialidades pendientes de aplicar en cortes subsecuentes por *****

***** ,
ambos importes integran el monto original de las compras por *****

***** , por tanto, las
parcialidades pendientes no constituyen operaciones distintas ni cantidades adicionales que deban sumarse nuevamente a dicho monto.

[illegible]

Concepto	Importe



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Menos: tres abonos “Límite convertido en saldo” registrados en la cuenta de depósito	*****
Importe neto cuya restitución se solicita	*****

Conforme a la precisión formulada por el actor al
desahogar la prevención, la prestación C) tiene naturaleza
exclusivamente declarativa y liberatoria: persigue la nulidad
de la contratación y activación de la tarjeta y la cancelación
contable de los cargos y accesorios derivados de ella, no el
pago de *****
***** a favor del accionante.

Los cinco pagos aplicados a ese producto con
recursos de la cuenta de depósito, por *****

***** , se reclaman una sola vez dentro de las
prestaciones A) y B), evitando cualquier duplicidad.

Las referidas **documentales** por su idoneidad y
eficacia, tiene pleno valor probatorio en términos de lo
dispuesto por los artículos 1,238, 1,241 y 1,296, todos del

De lo anterior, se colige que se aportan elementos probatorios suficientes para demostrar la existencia de las operaciones controvertidas.

TERCER ELEMENTO.

Para abordar este elemento, conviene tener presente que en tratándose de operaciones bancarias efectuadas mediante medios electrónicos o plataformas digitales, rige el principio procesal de que la carga de la prueba sobre la fiabilidad técnica del sistema, la trazabilidad de los accesos y el debido cumplimiento de los factores de autenticación acordados con el usuario, corresponde a la institución bancaria y no al cliente, dada la posición de asimetría técnica y material que existe entre ambos.

En ese sentido, de conformidad con los artículos 77 y 91 de la Ley de Instituciones de Crédito, las entidades financieras tienen el deber ineludible de salvaguardar los



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

recursos depositados por el público usuario, implementar mecanismos seguros de identificación y verificar la autenticidad e integridad de las instrucciones de pago o disposición que reciban a través de sus canales electrónicos. Por tanto, cuando el cuentahabiente niega lisa y llanamente haber expedido las instrucciones de transferencia, consentido cargos comerciales o dispuesto de un crédito a su nombre, opera a su favor una presunción de ausencia de consentimiento, revirtiendo la carga de la prueba a la institución depositaria para justificar la fiabilidad y apego normativo de las operaciones cuestionadas.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 17/2021, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2023157, de rubro y texto siguientes:

“TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS. CUANDO SE RECLAME SU NULIDAD, CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN BANCARIA DEMOSTRAR QUE SE SIGUIERON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS NORMATIVAMENTE PARA ACREDITAR SU FIABILIDAD. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas distintas respecto a quién correspondía demostrar, en un juicio de naturaleza mercantil, la fiabilidad del mecanismo por el cual se efectuaron transferencias electrónicas de recursos mediante la utilización de plataformas digitales; así, uno estimó que cuando el cuentahabiente niega haber dado su autorización al banco para realizar la transferencia y la institución de crédito afirma que sí recibió la instrucción, corresponde al primero demostrar que el sistema que opera las firmas electrónicas carece de fiabilidad y, por tanto, que su cuenta fue sabotada electrónicamente; mientras que el otro sostuvo lo contrario, es decir, que corresponde a la institución bancaria soportar la carga probatoria de acreditar que las mismas se realizaron mediante el uso de los elementos de seguridad empleados para garantizar la certeza de las operaciones.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no puede presumirse la fiabilidad de la banca

Justificación: Las disposiciones aludidas establecen la previsión de contenidos mínimos para el funcionamiento de la banca electrónica tratándose de las transferencias de recursos, dentro de los que destacan: a) la introducción de mecanismos complejos de autenticación del usuario divididas en cuatro categorías; b) el establecimiento de operaciones con las cantidades dinerarias máximas que pueden llevarse a cabo bajo determinado medio de autenticación; c) la necesidad de registrar previamente las cuentas de destino, así como el periodo mínimo que debe transcurrir antes de poder realizar la transferencia, según sea el caso; y, d) la obligación de generar comprobantes y notificar al usuario de las transacciones. Sin embargo, a partir de que actualmente se conocen diversas maneras de poder obtener fraudulentamente datos de los clientes o vulnerarse contenido electrónico para realizar operaciones sin el consentimiento de los usuarios, la presunción en el sentido de que las transferencias mediante mecanismos electrónicos son infalibles no puede prosperar, por lo que no es posible trasladar, en un primer momento, la carga de la prueba al usuario del servicio; máxime si se considera la tecnicidad de los sistemas digitales por medio de los cuales se presta el servicio de la banca electrónica lo que representa un obstáculo excesivo a efecto de que el usuario del servicio pudiera demostrar su pretensión, además de que el banco es quien cuenta con la infraestructura necesaria para generar la evidencia presentada ante los órganos jurisdiccionales. De manera tal que la institución financiera es quien debe acreditar que los procedimientos de identificación que fueron utilizados durante la transacción y que fueron acordados con el usuario se emitieron correctamente, además de la fiabilidad del procedimiento que se utilizó para

Al ofertar tales probanzas, la accionante manifestó bajo protesta de decir verdad no poseerlas por obrar en poder exclusivo de la demandada; circunstancia por la cual se requirió a la enjuiciada su presentación con el apercibimiento de ley, toda vez que la institución bancaria fue omisa en dar cumplimiento, esto es, se abstuvo de exhibir registro alguno; en la audiencia de juicio, se hizo efectivo el apercibimiento decretado, teniéndose por ciertas las afirmaciones que la parte actora pretendía acreditar con tales medios de convicción, salvo prueba en contrario, de conformidad con lo previsto por el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio.

Asimismo, al no comparecer la parte demandada al desahogo de la prueba confesional a su cargo, se tuvieron por ciertos los hechos que el actor pretende acreditar con este medio de convicción, robusteciendo la presunción de certeza sobre los hechos fundatorios de la demanda, pues aunque se admite prueba en contrario, no se ofreció medio de convicción por la enjuiciada.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.4o.C. J/28, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, del mes de junio de 2008, en su página 1098, correspondiente a la Novena Época y con número de registro 169509, que es del tenor literal siguiente.

“DOCUMENTO EN PODER O A DISPOSICIÓN DE LA CONTRAPARTE DEL OFERENTE. LA CONTUMACIA DE ÉSTA PARA APORTARLO AL JUICIO MERCANTIL GENERA LA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

LEGALIDAD DE LA DECLARACIÓN DE CERTEZA DE LAS AFIRMACIONES SOBRE LOS HECHOS CONTENIDOS EN ESE INSTRUMENTO, PRODUCIDAS POR QUIEN OFRECIÓ DICHO MEDIO DE PRUEBA. En los juicios mercantiles es

MEDIO DE PRUEBA. En los juicios mercantiles es apegada a derecho la determinación del juzgador, en el sentido de tener por ciertas las afirmaciones producidas por la parte que, para demostrar su dicho, ofrece el medio probatorio, cuya incorporación al juicio depende de la voluntad de su contraparte; pero ésta, en desacato a la prevención formulada al efecto, impide que la prueba llegue al proceso. En la emisión de este punto de vista se tiene en consideración, que en los procesos mercantiles hay ocasiones en que alguna de las partes no cuenta o no tiene a su disposición el medio de prueba, cuya aportación al proceso le es indispensable para acreditar la afirmación sobre un hecho relevante, pues se encuentra en poder o está a disposición de su contraparte. A este respecto, específicamente con relación a los documentos que deben acompañarse a la demanda, el penúltimo párrafo de la fracción III del artículo 1061 del Código de Comercio autoriza al juzgador a que, si se surte la hipótesis prevista en el propio precepto, aperciba con la imposición de una medida de apremio a quien tenga la responsabilidad de proporcionar el documento al interesado, para que éste se encuentre en condiciones de aportarlo al juicio. Este precepto regula una de las manifestaciones de los poderes con que cuenta el juzgador en materia probatoria, para alcanzar la finalidad que sobre el tema, le impone el artículo 1205 del Código de Comercio, que es la de arribar a la verdad sobre los hechos litigiosos. En concordancia con los referidos preceptos se tiene asimismo en cuenta, que el artículo 1158 del propio código faculta al Juez a utilizar, sin limitación de ninguna especie, toda clase de apercibimientos de los que permite la ley, para hacer cumplir las determinaciones que dicte en toda clase de medios preparatorios a juicio. Si esta potestad es admisible usarla en toda clase de medios preparatorios, con mayor razón debe ser empleada dentro de los juicios, en los cuales la sociedad está interesada, no sólo en su pronta resolución, sino en que en cada fallo se haga patente el Estado de derecho, a través de la emisión de una sentencia justa. Por este motivo, es apegado a derecho que para recabar documentos en casos como el previsto en el penúltimo párrafo de la fracción III del artículo 1061 del Código de Comercio, el juzgador requiera la prueba con el apercibimiento de tener por ciertas, salvo prueba en contrario, las afirmaciones de la parte, cuyo oponente se niegue a proporcionar el propio medio probatorio que, estando en su poder o en condiciones de disponer, haya sido

[illegible]

En ese orden de ideas, administradas la negativa expresa del actor con la presunción derivada de la contumacia de la institución bancaria y la falta de aportación de sus registros informáticos, se adquiere plena convicción judicial de que el titular no consintió:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

a) Las cinco transferencias electrónicas interbancarias (SPEI) por un total de ***** *

*****;

b) Los cinco pagos aplicados a la tarjeta de crédito por ***** *
*****;

c) Los veinte cargos de comercio por un total de

***** *

1302328 1254103
CUSTODIO DE LA CUSTODIA
CUSTODIO DE LA CUSTODIA

Asimismo, por lo que hace específicamente a la prestación identificada con el inciso C), relativa al contrato de apertura de crédito y a la tarjeta “*** **”, terminación ***, el examen conjunto de las constancias revela que si bien el estado de cuenta aportado acredita la existencia registral de dicho instrumento crediticio y de sus cargos correlativos, **no demuestra que el accionante hubiera emitido su consentimiento para obligarse en tales términos**, ni que hubiese solicitado la conversión de ***** *

***** de la línea de crédito en saldo a favor de la cuenta de depósito (operaciones consistentes en los tres movimientos de “*Límite convertido en saldo*” por *****

***** y *****

***** , examinados en el considerando previo), ni las compras por *****

***** que

***** componen los cargos imputados a dicha tarjeta.

actor, se tiene por demostrada la falta de consentimiento de éste para el otorgamiento y uso de dicho producto crediticio.

En consecuencia, al actualizarse la presunción legal derivada del requerimiento insatisfecho, sumada a la total falta de justificación por parte de la enjuiciada respecto de los protocolos de seguridad y autenticación que la normativa le impone, se genera certeza jurídica de que el actor no consintió las operaciones controvertidas ni la relación crediticia accesoria; dándose por satisfecho, cabalmente, el tercer elemento de la acción intentada.

SÉPTIMO. Conclusiones. Al no existir excepciones y defensas opuestas por la demandada, ante su omisión de dar contestación a la demanda instaurada en su contra; y, encontrarse debidamente acreditada la acción de nulidad ejercida por la parte actora, lo procedente es declarar la **nulidad absoluta de la apertura y contratación del crédito en cuenta corriente relativo a la tarjeta de crédito “Nu, Oro”, terminación ******, así como la **nulidad absoluta de las operaciones bancarias materia de la litis** celebradas el uno de agosto de dos mil veintiséis, consistentes en tres disposiciones de crédito, cinco transferencias vía SPEI, cinco pagos aplicados a la citada tarjeta de crédito y veinte cargos de comercio; y por tanto, la **CANCELACIÓN** de los cargos efectuados en la cuenta de depósito bancario número ********* (CLABE interbancaria *********), de la cual es titular el actor ******* *******, mismos que se detallan a continuación:

1. Transferencias electrónicas interbancarias (SPEI):

FECHA	DEL 01 AL 31 AGO 2026 (31 DÍAS)	MONTO EN PESOS MEXICANOS
*** **	***** **	*****



Juicio Oral Mercantil 751/2026-I

- 39 -

La suma de los rubros anteriores da un total de cargos

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

y retiros indebidos por la cantidad de *****

Ahora bien, tomando en consideración que durante los referidos eventos se registraron disposiciones con cargo a la línea de la tarjeta de crédito no reconocida por un total de

propia cuenta de depósito número ***** con anterioridad

a la culminación de las disposiciones antes detalladas, y al

haberse decretado la nulidad absoluta de la contratación de dicha tarjeta de crédito —lo que extingue cualquier obligación

a cargo del accionante por concepto de dicho crédito—, dicha

suma de *****

***** , debe ser deducida de la sustracción bruta a efecto de evitar un enriquecimiento sin causa, fijándose el perjuicio patrimonial efectivamente resentido en la cantidad neta de

***** *

[illegible]

Por lo anterior, **se condena a la demandada** *****

***** ***** ***** ** ***** *****

ASIA DE LA FEDERACIÓN

restituir a favor de la actora la cantidad neta de *****

***** ***** *

, monto que resulta de

la deducción legal de los fondos depositados frente a las operaciones controvertidas cuya nulidad ha sido decretada, al haberse dispuesto indebidamente de dicho patrimonio sin su consentimiento.

tarjeta de crédito **** terminación ****, así como de los cargos efectuados a ella por *****

***** integrados por consumos contratados a meses por *****

***** y

disposiciones de saldo que, con sus comisiones, importan

***** , las disposiciones de saldo de la

tarjeta son distintas de las treinta operaciones con cargo a la cuenta de depósito y no incrementan su número

Como consecuencia de la nulidad de la contratación y activación de la tarjeta de crédito “*** ”, terminación ****, y de las operaciones realizadas con cargo a ella, se condena a la demandada a **cancelar definitivamente los cargos impugnados por** *****

***** así como todos los intereses, comisiones, impuestos y demás accesorios derivados de dicha contratación y de esas operaciones, de manera que no subsista saldo deudor exigible al actor por tales conceptos.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Asimismo, se **condena** a la demandada a abstenerse de realizar cualquier gestión de cobranza en contra del actor por dicho concepto, debiendo **tramitar ante las Sociedades de Información Crediticia** la eliminación de cualquier registro negativo, reporte vencido o nota desfavorable asentada con motivo de dicha tarjeta de crédito a nombre de ***** .

Lo que la enjuiciada deberá cumplir dentro del término de tres días siguientes a la fecha en que cause ejecutoria la presente resolución o sea legalmente ejecutable, bajo apercibimiento que de no hacerlo se procederá en la vía de apremio correspondiente, conforme a lo dispuesto por el artículo 1347 del Código de Comercio.

OCTAVO. Intereses. La parte actora reclamó, bajo la prestación marcada como “D” del capítulo de prestaciones de su escrito inicial de demanda (precisada en el desahogo de prevención de veintisiete de agosto de dos mil veintiséis), el pago de los intereses moratorios al tipo legal del seis por ciento anual, en términos del artículo 362 del Código de Comercio, generados sobre la suerte principal líquida de

***** * ***** *

*****, computados desde el uno de agosto de dos mil
veintiséis —fecha en que se realizaron las disposiciones y se
efectuó el reporte correspondiente a la demandada— y hasta
su restitución íntegra y efectiva.

Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 61/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 298, con número de registro: 2022554, que dice:

[illegible]



análisis sistemático a los artículos 267, 271, 272 y 273 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 332, 333, 334, 335 y 338 del Código de Comercio, 46, 48, fracción I, y 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito y demás aplicables en materia bancaria, tratándose de cargos no reconocidos efectuados con tarjeta de débito, la institución financiera depositaria tiene obligación de conservación y restitución del dinero cuya propiedad le transfirió el cuentahabiente y, por ende, cuando ocurre esta situación, tendrá el deber de responder por los montos sustraídos. En este sentido, del Código de Comercio se desprende lo siguiente: 1. El reembolso de cargos no reconocidos por el titular de una tarjeta de débito, vinculada a una cuenta de depósito de dinero abierta en una institución bancaria sí constituye una obligación a cargo de ésta como depositaria; pues aunque detenta la propiedad del dinero incurre en negligencia en la conservación de los fondos entregados para ser retirados a la vista por el depositante, y; 2. La obligación de reembolso en el caso de cargos no reconocidos se contrae cuando el titular de la tarjeta de débito denuncia el hecho a la institución y solicita su restitución. Conforme a estas premisas, el depositario tiene el deber de conservación del patrimonio y de restitución cuando, entre otros supuestos, el depositante pretenda retirarlo a la vista a través de los medios que autorizan las normas relativas (tarjeta de débito); por lo que si alguien distinto al titular de la cuenta realiza un cargo que éste no reconoce y genera un menoscabo en su patrimonio, es posible presumir un descuido de la cosa depositada y, por ende, la obligación del depositario de responder al depositante, lo que lo coloca en una posición de deudor frente al cuentahabiente-tarjetahabiente acreedor. Luego, si la institución bancaria depositaria del dinero no restituye el monto del cargo no reconocido al titular de la tarjeta de débito vinculada a la cuenta de depósito que contrató, deberá pagar, además de los intereses ordinarios que se hubieren pactado en el contrato de adhesión o cualquier otro instrumento convencional en la proporción que corresponda a la cantidad indebidamente sustraída, los intereses moratorios en razón del 6% anual, en términos del artículo 362 del Código de Comercio, no obstante la ubicación de este precepto en el Libro Segundo, Título Quinto, Capítulo Primero, del Código de Comercio que se ocupa del préstamo mercantil, porque debe reputarse su aplicación general y, por ende, aplicable a todos los contratos de carácter comercial en los que el deudor deba pagar un interés moratorio."

Consecuentemente, se condena a la parte demandada

***** , generados a **partir del uno de agosto de dos mil veintiséis** —fecha en la cual se efectuaron los cargos y el actor dio aviso e hizo del conocimiento a la institución demandada sobre las operaciones no reconocidas—, así como, los que se sigan generando, y hasta la total acreditación ante este juzgado del pago de la suerte principal.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.93/2023, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, de rubro y texto:

“CARGOS NO RECONOCIDOS A TARJETA DE DÉBITO. PROCEDE EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR LA DISPOSICIÓN DE DINERO SIN AUTORIZACIÓN DEL CUENTAHABIENTE A PARTIR DE QUE ÉSTE HACE EL AVISO CORRESPONDIENTE Y LA INSTITUCIÓN BANCARIA NO REEMBOLSA LAS CANTIDADES SUSTRÁIDAS.-

Hechos: Un Tribunal Colegiado de Circuito y un Pleno de Circuito sostuvieron un criterio distinto al analizar a partir de qué momento deben computarse los intereses moratorios con base en el artículo 362 del Código de Comercio por cargos indebidos realizados a cuentahabientes de una institución bancaria, a los que obliga la jurisprudencia 1a./J. 61/2020 (10a.), de rubro: "CARGOS NO RECONOCIDOS A TARJETA DE DÉBITO. PROCEDE EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR LA FALTA O RETRASO EN LA RETRIBUCIÓN DE LAS CANTIDADES SUSTRÁIDAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO."

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el pago de intereses moratorios reclamados con base en el artículo 362 del Código de Comercio, debe contabilizarse a partir del aviso que hace la persona



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

tarjeta habiente a la institución bancaria sobre los cargos no reconocidos y no a partir de la sentencia que declara la nulidad de los actos que originaron esta situación.

Justificación: Se afirma lo anterior, pues en términos de la jurisprudencia 1a./J. 61/2020 (10a.) citada y del análisis sistemático a los artículos 267, 271, 272 y 273 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 332, 333, 334, 335 y 338 del Código de Comercio; 46, 48, fracción I, y 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito y demás aplicables en materia bancaria, tratándose de cargos no reconocidos efectuados con tarjeta de débito, la institución financiera depositaria tiene la obligación de conservación y restitución del dinero cuya propiedad le transfirió la persona cuentahabiente y, por ende, cuando ocurre esta situación tendrá el deber de responder por los montos sustraídos y, si la institución bancaria depositaria del dinero no restituye el monto del cargo no reconocido a la titular de la tarjeta de débito vinculada a la cuenta de depósito que contrató, deberá pagar los intereses moratorios en razón del 6% (seis por ciento) anual, en términos del artículo 362 del Código de Comercio. Esto se debe a que la responsabilidad que provoca el descuido del dinero surge desde que se detecta su indebida disposición y no hasta la resolución favorable que se dicte en el proceso o procedimiento al que se obliga a la persona cuentahabiente a accionar para recuperar el dinero que la institución bancaria se niega a devolver, a pesar de tener que reembolsarlo; por tanto, no es adecuado acudir a la regla de que el acto produce sus efectos hasta en tanto no se declare su nulidad, como lo disponen los artículos 2226 y 2229 del Código Civil Federal, puesto que ésta se produce cuando es necesario acudir a juicio para demostrar un punto de derecho y, en este caso, la institución bancaria no debe obligar a sus clientes a reclamar lo que es suyo mediante un proceso o procedimiento, ya que la devolución de lo descuidado debe efectuarse con el solo aviso que realiza el cuentahabiente. Sin embargo, en caso de acudir a una vía procesal o procedimental, la declaración de nulidad de los cargos reclamados trae como consecuencia que los efectos se retrotraigan hasta el momento en que se realizaron los cargos de manera indebida, si la institución bancaria no devolvió, inmediatamente, el patrimonio afectado, lo cual no desconoce el hecho de que el banco puede y debe demostrar que el cargo fue realizado por el titular de la tarjeta de débito o alguno de sus autorizados; en cuyo caso, realizará las actuaciones que le marcan las leyes relativas y los lineamientos del Banco de México para evidenciar este hecho al

Cálculo intereses moratorios

“Artículo 84. En los contratos mercantiles no se reconocerán términos de gracia o cortesía, y en todos los cálculos de días, meses y años, se entenderán: el día, de veinticuatro horas; los meses, según están designados en el calendario gregoriano; y el año, de trescientos sesenta y cinco días”.

***** X 6 % = ***** (interés por un año).

***** X 80 (días) = ***** (interés legal del do).

[illegible]



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

se emite la sentencia—, periodo que corresponde a un
total de 80 (ochenta) días, equivale a ***** ***** **

***** *, sin perjuicio de cuantificar los que se sigan

generando hasta el pago total del adeudo.

En consecuencia, deberá pagar la demandada a la actora la anterior cantidad, dentro del término de **tres días** siguientes, en que surta efectos la notificación de la presente resolución, con fundamento en el artículo 1,079, fracción VI, del Código de Comercio.

NOVENO. Gastos y costas. Cabe precisar, que el artículo 1,084 del Código de Comercio establece que debe condenarse a costas en dos supuestos, a saber, cuando así lo prevenga la ley y cuando a juicio del juez se haya procedido con temeridad o mala fe, dicho numeral es del tenor siguiente:

“Artículo 1,084. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando a juicio del juez se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán condenados:

I. El que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción, si se funda en hechos disputados;

II. El que presentase instrumentos o documentos falsos, o testigos falsos o sobornados;

III. El que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable. En este caso la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente;

IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutive, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación comprenderá las costas de ambas instancias, y

V. El que intente acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o excepciones improcedentes o interponga recursos o incidentes de este tipo a quien no solamente se le condenará respecto de estas acciones, defensas, excepciones, recursos o incidentes improcedentes, sino de las excepciones procesales que sean inoperantes.”



sentencias conformes de toda conformidad en su parte
resolutiva; de manera que no procede realizar la condena en
costas con base en el supuesto a que se ha hecho mérito.

Finalmente, la fracción V del artículo 1,084 del Código de Comercio establece, que siempre será condenando en costas, el que intente acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o excepciones improcedentes o interponga recursos o incidentes de este tipo, a quien no solamente se le condenará respecto de estas acciones, defensas, excepciones, recursos o incidentes improcedentes, sino de las excepciones procesales que sean inoperantes.

En esa virtud, no procede a condenar en costas a las partes, ya que la acción resultó procedente, mientras que la parte demandada se constituyó en rebeldía; con apoyo en la fracción V del artículo 1,084 del Código de Comercio.

Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia PC.III.C. J/29 C (10a.) sustentada por el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, Mayo de 2017, visible en la página 1043, que es del tenor siguiente:

“COSTAS EN LOS JUICIOS ORALES MERCANTILES. PARA RESOLVER SOBRE SU CONDENA NO PROCEDE APLICAR SUPLETORIAMENTE LA LEY ADJETIVA FEDERAL O LOCAL, RESPECTIVA. En los juicios orales mercantiles no procede resolver el tema de costas aplicando la teoría del vencimiento contenida tanto en el artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio, como en el diverso 7o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, en atención a que el primer precepto invocado veda esa posibilidad tratándose de los juicios orales mercantiles, al prever ese supuesto sólo para los ejecutivos; además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1223/2014, del cual derivó la tesis 1a. LXVI/2015 (10a.), de título y subtítulo: “COSTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, QUE PREVE SU CONDENA. NO ES APLICABLE A LOS

Por lo anteriormente expuesto y atendiendo a la nulidad antes decretada y en consideración que la consecuencia connatural es que se destruyan retroactivamente los actos originados con motivo de la operación tildada de nula, obligando a las partes a restituirse mutuamente lo que hubieren recibido o percibido en virtud o por consecuencia del acto anulado: con apoyo en lo dispuesto en los artículos 1,321, 1,322, 1,324, 1,325, 1,327, 1,328, 1,329, 1,390 Bis 38 y 1,390 Bis 39 del Código de Comercio en vigor, se;

PRIMERO. Ha sido procedente la vía oral mercantil



SEGUNDO. Se declara la nulidad absoluta de la apertura y contratación del crédito en cuenta corriente relativo a la tarjeta de crédito “*** **”, con terminación ***, así como la nulidad absoluta de las operaciones bancarias materia de la litis consistentes en disposiciones de crédito, transferencias electrónicas, pagos a la citada tarjeta de crédito y cargos efectuados el uno de agosto de dos mil veintiséis en la cuenta de depósito bancario número *****, cuya titularidad corresponde al accionante, en los términos precisados en los considerandos sexto y séptimo de esta resolución.

TERCERO. Se condena a la demandada a reembolsar al actor ***** la cantidad de ***** que fue dispuesta del patrimonio del accionante, así como a la cancelación definitiva del saldo deudor derivado de la tarjeta de crédito nula y a gestionar la supresión de cualquier nota negativa o reporte ante las Sociedades de Información Crediticia, conforme a lo razonado en el considerando séptimo del presente fallo.

CUARTO. Se condena a la institución bancaria demandada a pagar al actor la cantidad líquida de *****

***** **

Así lo resolvió y firma, el licenciado **Oziel Rosas Guarneros**, Juez Cuarto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, asistido del licenciado Uziel Monter Guevara, secretario con quien actúa y da fe.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

171783293_4005000042387760010.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	UZIEL MONTER GUEVARA		Validez:	BIEN Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.01.7b.2b		Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	20/10/26 21:00:14 - 20/10/26 15:00:14		Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	d4 ea 7f e8 cd ec 14 18 7c ee 88 8c 8d f9 b3 ae 39 cc 24 59 6e e9 2d 22 0f b2 c0 67 a5 30 1d 0c ca a5 25 2e f2 7d 82 0a 64 cf 8c 16 61 c1 3a 33 fd 7c 26 08 f2 d2 6d c0 78 0c cf a8 d8 55 08 64 76 8a db 08 e1 ab 05 8c 6f 27 b4 dc f1 8a e1 d7 aa 6b 1e d7 b7 f1 2c 6c dc bc 1e 0c fd 4e 23 0f 23 b4 51 56 4e d3 ca 63 5e 43 a9 fe e8 5c d8 d0 75 75 50 b0 e7 51 24 3a f6 f5 55 4b c3 9b 06 c0 b5 03 ee 6b ab 71 3f 9a 9d 9b 90 6b c5 f8 f5 df c2 21 ea 37 0a e6 b2 d2 59 8f 4a c7 da 37 6f 4f 96 97 1b c5 c3 92 be 7f 33 71 d0 70 0b 8f 1e c0 b2 58 25 e9 c8 5d 6c de 30 1c 8d 37 16 99 8a f2 71 04 c0 a2 0a e1 c3 34 c1 c6 f3 68 77 b2 04 17 a5 93 d7 40 64 8d eb f7 9c 7e f1 0d fc d4 a3 35 3d a4 d2 26 b9 ad a9 82 ab 9d b2 a2 26 8a 76 85 7d 13 49 56 78 97 3e 76 5b 0a 67 56 33 c5 1d 98 3f a8 b8 b7 3e 36 82 26 09 74 60 1e 74 5c 2b a5 a5 fb 98 fd df d4 09 6f b8 bc 27 b0 11 3e cc b5 41 a5 91 7d 6e da be 28 2a 6d c7 1f d7 0c bd 15 c5 73 24 5b 30 5e 7d b4 6f 85 23 ec 75 d5 e8 2b 89 e2 a6 cd f8 81 cb ef d1 1e d4 ca 78 db 86 f2 f3 09 cc 85 70 c2 dc 8b 6e e6 68 01 19 8f fb 0d 9b ba c5 7e 4f c9 47 5c 33 c9 1f ba a5 72 75 c2 79 c4 e7 f1 20 5d 52 75 e9 6c ec a4 af 57 2e 0a			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	20/10/26 21:00:15 - 20/10/26 15:00:15			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7b.2b			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	20/10/26 21:00:15 - 20/10/26 15:00:15			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	222696774			
Datos estampillados:	/HDyghXPVDGvw6ZojU+beqJAxM=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	OZIEL ROSAS GUARNEROS	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.01.62.60	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	20/10/26 23:34:03 - 20/10/26 17:34:03	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	2d 23 45 77 e4 b4 be 97 72 93 58 ed 4f 5b 17 6a 75 82 f6 b0 f1 95 f9 6f cd a3 29 5f 9c ff 9e 62 d2 69 d9 d3 f4 17 5a 81 46 2c 9a a9 77 2d 20 5f 5d b4 f8 85 e1 da ea a4 ef ac 27 c6 9d f3 7a 7f ec 4c 36 ca 1c d1 4e d1 f8 88 ae da 48 14 c8 a1 b6 f6 53 d3 b4 3a 75 fd 0e fa e0 99 ee 14 7b f2 8e f1 7e aa 04 85 b5 88 45 29 7c a5 19 33 37 92 a6 93 8e 22 a1 35 cb 42 54 96 b3 d8 0a 4a 04 67 d0 b6 ed a1 ca d2 27 48 d0 4a 22 f4 e6 d6 54 e3 03 17 a5 a6 cf 8b ec 68 c8 71 c5 b0 bc bf 55 f3 4c 83 c8 e5 be e5 e0 61 81 00 f7 51 e3 65 6d 85 7f f8 03 76 d1 c3 67 96 12 b9 32 22 1a 09 d6 3c 43 9d 2f e8 76 5e 0c 01 c2 3b d6 5e b3 4f 15 dd 20 69 4f b0 55 e0 70 5b 80 bc 3e ad 42 20 2b 78 ab 34 f6 51 be 21 61 18 f2 50 cb 7b 6b 40 78 56 ae 1c 03 1b 8e 14 f0 5c 04 e9 f3 90 cd 63 f3 3b 1d 3f 0c 86 66 64 cc 1e f8 59 df 41 14 e7 08 46 4c 46 b4 52 0c cd 09 4c cf b8 3e f9 0a 90 9c 85 53 71 c9 bd 5b a8 f9 04 6e 31 fe de 77 9f 06 df 1d ce 81 b8 a3 af 1b 5c 0c 9e 3a b5 76 e6 84 7d 63 ad c9 4e d3 a0 c1 40 04 95 ab ab f5 e3 d8 dc f9 99 35 62 c8 cd df 2f c6 f6 b6 05 2a 6a 8b 7d 59 56 0c 6e 11 33 9a c7 bc 9e 12 d8 ea 4b 38 17 bd c6 25 b2 44 ce f3 13 a1 4a f4 be ff e1 69 ce			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	20/10/26 23:34:03 - 20/10/26 17:34:03			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.01.62.60			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	20/10/26 23:34:04 - 20/10/26 17:34:04			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	222841388			
Datos estampillados:	bbvNbQjdN5bbQe88Jct+y8UhjCQ=			

El diecinueve de octubre de dos mil veintiseis, el licenciado Uziel Monter Guevara, Secretario(a), con adscripción en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, hago constar y certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.